

Luis Alberto Romero

BREVE HISTORIA CONTEMPORÁNEA
DE LA ARGENTINA

VIII. El proceso, 1976-1983
(fragmento)

La vuelta de la democracia

La derrota agudizó la crisis del régimen militar, planteada desde el descalabro financiero de 1981, e hizo públicos los conflictos hasta entonces disimulados. La cuestión de la responsabilidad de la derrota —que unos a otros se atribuían— se resolvió provisionalmente achacándola a los jefes operativos, aunque luego salieron a la luz fallas más sustanciales, que involucraban a los altos mandos; finalmente, el informe de una comisión investigadora, presidida por un general muy prestigioso, responsabilizó a la propia Junta Militar y la llevó a un juicio que, posteriormente, concluyó en la condena a los comandantes. En lo inmediato, las tres fuerzas no se pusieron de acuerdo sobre el sucesor de Galtieri, y aunque el Ejército pudo imponer a su candidato, el general Reinaldo Bignone, la Marina y la Aeronáutica se retiraron de la Junta Militar, creando una situación institucional insólita: un presidente designado por el comandante en jefe del Ejército. Quizá hubiera sido el momento para que un vigoroso movimiento civil desplazara a las Fuerzas Armadas, pero tal movimiento estaba lejos de existir, y el designado presidente logró afirmarse gracias a un consenso mínimo de las fuerzas políticas para un programa de reinstitucionalización sin plazos definidos. Pasado el momento más agudo de la crisis, se produjo una recomposición interna, se renovaron los comandos de la Armada y la Aeronáutica y se reconstituyó la Junta.

La salida electoral propuesta sirvió para calmar los reclamos de las fuerzas políticas. Pero el gobierno se proponía negociarla y asegurar que su retirada no sería un desbande. Se intentó lograr el acuerdo de los partidos para una serie de cuestiones, futuras y pasadas: la política económica, la presencia institucional de las Fuerzas Armadas en el nuevo gobierno, y sobre todo una garantía de que no se investigarían ni actos de corrupción o enriquecimientos ilícitos ni responsabilidades en lo que los militares empezaban a llamar la “guerra sucia”, con un eufemismo comparable al de “desaparecidos”. Por entonces, todo ello empezaba a ser hecho público de manera casi sensacionalista por una prensa que había decidido olvidar la censura. Las aspiraciones militares se incluyeron en una propuesta, presentada en noviembre de 1982 y rechazada por la opinión pública en general y por los partidos, que convocaron poco después a una marcha civil en defensa de la democracia. La asistencia fue masiva y, casi de inmediato, el gobierno fijó la fecha de elecciones, para fines de 1983, aunque siguió buscando lo que constituía su objetivo fundamental: clausurar cualquier cuestionamiento futuro al desempeño pasado de los militares. Un documento final debía clausurar el debate sobre los desaparecidos, con la afirmación de que no había sobrevivientes y de que todos los muertos habían caído combatiendo; una ley estableció una autoamnistía, eximiendo a los responsables de cualquier eventual acusación.

Quizá la dirigencia política se hubiera avenido a un acuerdo que implicara correr un telón sobre el pasado y asegurar una transformación no traumática del régimen militar en otro civil, pero lo impidió tanto la movilización cada vez más intensa de la sociedad como la propia debilidad de las Fuerzas Armadas, corroídas por la creciente conciencia de su ilegitimidad y por sus propios conflictos internos. Quienes estaban al frente del gobierno y negociaban la reinstitucionalización eran incapaces de controlar el aparato represivo que habían montado —el que cobró algunas nuevas víctimas, que la sociedad, sensibilizada, registró con horror— y aun de asegurar que no serían derrocados por algún grupo de oficiales, porque de hecho las Fuerzas Armadas habían entrado en estado deliberativo, tanto acer-

ca del pasado como del futuro. Los militares debían enfrentarse con la evidencia de su fracaso como administradores de un país desquiciado y como conductores de una guerra absurda, que los había llevado a luchar contra los que querían sus aliados y a unirse con un Tercer Mundo del que siempre habían desconfiado. Debían contemplar cómo sus antiguos aliados –los grandes empresarios, la Iglesia, Estados Unidos–, ganados por una nueva fe democrática, renegaban de los antiguos acuerdos, o cómo los otrora disciplinados jueces llevaban a los tribunales a oficiales acusados de distintos actos de corrupción. Sobre todo, debían enfrentarse con una sociedad que, después de años de ceguera, se enteraba de la existencia de vastos enterramientos de personas desconocidas, con seguridad víctimas de la represión, de centros clandestinos de detención, de denuncias realizadas por ex agentes, todo lo cual revelaba una historia siniestra, de la que hasta entonces pocos habían querido enterarse. En esas condiciones, el intento de recomponer las antiguas alianzas, que había guiado al último gobierno de las Fuerzas Armadas, difícilmente hubiera podido fructificar.

Después de un largo letargo, la sociedad despertaba, y encontraban nueva resonancia voces que nunca se habían acallado, como la de los militantes de las organizaciones defensoras de los derechos humanos, y muy especialmente las Madres de Plaza de Mayo. Su incontrastable manera de desafiar el poder militar se combinaba con una forma original de activismo, más laxa y menos facciosa que las tradicionales, que no inhibía otras pertenencias. Las marchas de los jueves, con escasa concurrencia en los años duros de la represión, se convirtieron luego de la guerra de Malvinas en nutridas “marchas por la vida”, que identificaban con eficacia al enemigo con la muerte. Las organizaciones de derechos humanos no sólo colocaron la cuestión de los desaparecidos en el centro mismo del debate, poniendo a los militares a la defensiva, sino que impusieron a toda la práctica política una dimensión ética, un sentido del compromiso y una valoración de los acuerdos básicos de la sociedad por encima de las afiliaciones partidarias que, en el contexto de las experiencias anteriores, era verdaderamente original.

A medida que la represión retrocedía y perdía legitimidad el discurso represivo —tan eficaz para la autocensura—, empezaron a constituirse protagonistas sociales de distinto tipo, algunos nuevos y otros que habían podido sobrevivir ocultándose. La crisis económica generó motivos legítimos y movilizadores: los impuestos elevados, los efectos de la indexación, la elevación de los alquileres, o las deudas impagas dejadas por una quiebra bancaria; y al reclamar y movilizarse cuestionaban tanto la política económica como la clausura de lo público. En otros casos era todo un pequeño fragmento de sociedad —un barrio, un pueblo— el que se organizaba sobre la base de solidaridades amplias tanto para reclamar —quizá con violencia, como en los “vecinazos” del Gran Buenos Aires a fines de 1982— como para buscar una solución a sus problemas al margen de las autoridades, bajo la forma de cooperativas, asociaciones de fomento o ligas de amas de casa. La nueva actividad de la sociedad se manifestaba también en los campos más diversos: los grupos culturales, como los que en Teatro Abierto organizaron desde 1980 la demostración de una vital cultura no oficial, convertida en verdadero acto político, los jóvenes que animaban grupos de trabajo en las parroquias, los que nutrían las multitudinarias peregrinaciones a Luján o los gigantescos recitales de rock nacional, que a su manera también resultaban actos políticos. El activismo renació en las universidades, al calor de los reclamos contra los cupos de ingreso o el arancelamiento, y en las fábricas y lugares de trabajo, donde empezaron a reconstituirse las comisiones internas y a reaparecer la práctica de la participación sindical.

De alguna manera, la sociedad experimentaba una nueva primavera: el enemigo común, algo menos peligroso pero aún temible, estimulaba la solidaridad y alentaba una organización y una acción de la que se esperaban resultados concretos. Nuevamente, los conflictos de la realidad aparecían transparentes, y posible la solución de los problemas, si los hombres y mujeres de buena voluntad se organizaban en una fuerza consistente. Pero a diferencia de la anterior primavera, no sólo había un repudio total de la violencia o de cualquier forma velada de guerra, sino también menos confianza en la posibilidad de encontrar una gran solución, única, radical y defi-

nitiva, y menos seguridad de que el amplio conjunto de demandas planteadas definieran un gran protagonista, un actor único de la gesta, como lo había sido, por mucho tiempo, el “pueblo peronista”. Precisamente los límites de este despertar de la sociedad se encontraron en la dificultad para agregar las demandas, integrarlas, darles continuidad y traducirlas en términos específicamente políticos.

En alguna medida, su integración debía darse también en la movilización sindical, que fue intensa: los sindicalistas sacaron la gente a la calle para reclamar contra la crisis económica y en favor de la democracia. A lo largo de 1982 y 1983 hubo una serie de paros generales y abundantes huelgas parciales, en las que se destacaron, por su nueva y aguerrida militancia, los gremios estatales. Pero en verdad, los sindicalistas pusieron sus esfuerzos en la recuperación del control de los sindicatos intervenidos, la “normalización”, que negociaron con el gobierno combinando la presión y el acuerdo. En esa estrategia concurrieron los dos grandes nucleamientos en que se encontraban divididos, más bien por razones tácticas, la combativa CGT de la calle Brasil, que encabezaba Saúl Ubaldini, y la negociadora CGT Azopardo. Su acción movilizadora fue perdiendo especificidad y confluyó en la lucha más general por aquello que concentraba las mayores ilusiones: la recuperación de la democracia.

La democracia fue en primer lugar una ilusión: la tierra prometida, alcanzada sin esfuerzo por una sociedad que, muy poco antes, adhería a los términos y opciones planteados por los militares. Luego del doble sacudón de la crisis económica y la derrota militar, la democracia aparecía como la llave para superar desencuentros y frustraciones, no sólo creando una fórmula de convivencia política sino también solucionando cada uno de los problemas concretos. Varias décadas sin una práctica real hacían necesario un nuevo aprendizaje de las reglas del juego, y también de sus valores y principios más generales, incluyendo los que tenían que ver, más allá de la democracia, con la misma república. Fue precisamente ese conocimiento vago y aproximativo el que permitió que se encabalaran en la nueva ilusión quienes nunca habían creído en ella, sobre todo los que estaban abandonando rápidamente el barco del Proceso. Pero se la

aprendió con intensidad, y se la puso en práctica pronto. La afiliación a los partidos políticos –luego de que el gobierno levantó definitivamente la veda– fue tan masiva que uno de cada tres electores pertenecía a un partido. Las movilizaciones en defensa de la democracia recordaron por su número a las de diez años atrás, pero a diferencia de aquéllas no eran ni fiestas ni ejercicios para la toma del poder sino la expresión de una voluntad colectiva, el mostrarse y el reconocerse como integrantes de la civilidad. Esa diferencia se expresó también en los lugares de concentración elegidos: junto con la tradicional Plaza de Mayo, la de la República, el Cabildo o los Tribunales, indicador éste del papel central que, según se esperaba, debía cumplir la Justicia.

La afiliación masiva transformó a los partidos políticos. Hubo un amplio deseo de participación y se animaron los comités o unidades básicas, donde empezaron a volcarse las demandas de la sociedad. También se renovaron los cuadros dirigentes, y se incorporaron los que en los últimos años habían militado en organizaciones juveniles o estudiantiles, como en el caso de la Coordinadora radical, así como muchos intelectuales, que trajeron a la política nuevos temas –muchos surgidos de las inquietudes que estaba planteando la sociedad, y otros de la experiencia de las sociedades democráticas más avanzadas– y también formas más modernas de plantearlos. Los viejos cuadros dirigentes se vieron desafiados por otros que desde los márgenes habían planteado posiciones discrepantes, de modo que la renovación fue amplia e integral.

Las transformaciones del peronismo fueron notables, pues el viejo movimiento, siempre en tensión con la democracia, se convirtió en un aceptable partido. La cuestión del verticalismo, que había signado su existencia, quedó superada por la notoria falencia del vértice –Isabel Perón sólo ocupó simbólicamente la presidencia–, y la estructura partidaria pudo también absorber a los sectores con fuerte organización corporativa, como los sindicalistas. Las formas participativas fueron adoptadas para regular la competencia interna, y los modernos temas y preocupaciones democráticas, que nunca habían sido el fuerte del movimiento, aparecieron en forma razonable.

La renovación, sin embargo, no fue completa: los viejos caudillos provincianos siguieron manteniendo un lugar importante, al igual que los dirigentes sindicales. El metalúrgico Lorenzo Miguel —el sucesor de Vandor, a quien los militares rehabilitaron a principios de 1983— volvió a conducir las 62 Organizaciones, rama gremial del peronismo, y gracias a su control de las afiliaciones llegó a ocupar la presidencia real del partido. Detrás de él ganaron espacios importantes caudillos sindicales de trayectoria poco clara, como Hermínio Iglesias, que alcanzó la candidatura a gobernador de la provincia de Buenos Aires. La candidatura a presidente recayó en Ítalo Luder, un jurista de prestigio pero con escaso poder real en el partido, que debía expresar el equilibrio entre las nuevas y viejas tendencias internas, pero que no pudo disipar la desconfianza que el peronismo despertaba en sectores importantes de la sociedad.

El radicalismo se renovó por impulso de Raúl Alfonsín, que en 1972 había creado el Movimiento de Renovación y Cambio para disputar el liderazgo a Ricardo Balbín. Durante el Proceso se distinguió del resto de los políticos, pues criticó a los militares con mucha energía, asumió la defensa de detenidos políticos y el reclamo por los desaparecidos y evitó involucrarse en la euforia de la guerra de Malvinas. Desde el fin de la guerra su ascenso fue vertiginoso, derrotando en la puja interna a los herederos de Balbín. Hizo de la democracia su bandera, y la combinó con un conjunto de propuestas de modernización de la sociedad y el Estado, una reivindicación de los aspectos éticos de la política y un discurso ganador, muy distinto del tradicional radical, que atrajeron al partido una masa de afiliados y simpatizantes.

Radicales y peronistas cosecharon amplios apoyos y dejaron poco espacio para otros partidos. A la derecha, siguió siendo difícil unificar fuerzas diversas, muchas de las cuales se habían comprometido demasiado con el Proceso como para resultar atractivas. El ingeniero Alsogaray constituyó un nuevo partido, la Unión del Centro Democrático, que empezó a beneficiarse con el impulso mundial hacia las concepciones ortodoxamente liberales, pero su cosecha mayor la haría años después. La izquierda padeció tanto por la dura represión de los años del Proceso como por la desactualización de

sus propuestas, muchas de las cuales fueron tomadas por el radicalismo alfonsinista, aunque el Partido Intransigente logró reunir un amplio espectro de simpatizantes, en buena medida nostálgicos de la política de 1973.

Alimentados por la movilización de la sociedad y por esta segunda y apacible primavera de los pueblos, sin embargo los partidos tuvieron dificultades para dar plena cabida a las múltiples demandas y al deseo de participación, que fue diluyéndose lentamente o se mantuvo al margen de ellos, como en las organizaciones de derechos humanos, cada vez más intransigentes en una demanda que los partidos intentaban traducir en términos aceptables para el juego político. La misma dificultad se manifestó respecto de los intereses sociales más estructurados, como los sindicales o los empresarios, cuyas demandas discurrieron por los cauces corporativos y prescindieron de los partidos para su expresión o negociación. De ese modo, el crecimiento de los partidos no supuso una eficaz intermediación y negociación de las demandas de la sociedad.

Tal situación, sin embargo, no preocupaba demasiado, pues la sociedad estaba adhiriendo con entusiasmo a una democracia que entendía como la primacía de la civilidad. Las formas de hacer política del pasado reciente —la intransigencia de las facciones, la subordinación de los medios a los fines, la exclusión del adversario, el conflicto entendido como guerra— dejaban paso a otras en las que se afirmaba el pluralismo, los acuerdos sobre formas y una subordinación de la práctica política a la ética. Celebrando la novedad —en rigor, hacía seis décadas que se había dejado de lado este juego democrático— se valoró y hasta sobrevaloró la eficacia de este instrumento. Para cuidarlo, nutrirlo y fortalecerlo, se puso sobre todo el acento en el consenso alrededor de las reglas y en la acción conjunta para la defensa del sistema. Quizá por eso se postergó una dimensión esencial de la práctica política: la discusión —civilizada y plural— de programas y opciones, que necesariamente implican conflictos, ganadores y perdedores, y se confió en el poder y la capacidad de la civilidad unida para solucionar cualquier problema. Esta combinación de la valoración de la civilidad con

un fuerte voluntarismo derivó en un cierto facilismo, en una especie de “democracia boba”, aséptica y conformista.

Los problemas derivados de esto se verían más adelante. De momento, la civilidad vivió plenamente su ilusión, y acompañó al candidato que mejor captó ese estado de ánimo colectivo. El peronismo encaró su campaña con mucho del viejo estilo, convocando a la liberación contra la dependencia —con tan poca convicción que uno de sus candidatos, en un revelador lapsus, equivocó en un discurso público la opción positiva— y apeló a lo peor del folclore del movimiento para denostar a su adversario. Raúl Alfonsín, en cambio, ganó su candidatura en la UCR primero, y las elecciones presidenciales luego, apelando en primer lugar a la Constitución, cuyo Preámbulo —seguramente escuchado por primera vez por muchos de sus jóvenes adherentes— era un “rezo laico”. Agregó una apelación a la transformación de la sociedad, que definía como moderna, laica, justa y colaborativa. Estigmatizó al régimen, aseguró que se haría justicia con los responsables y denunció en sus adversarios sus posibles continuadores, por obra del pacto entre militares y sindicalistas. Sobre todo aseguró que la democracia podía resolver no sólo los problemas de largo plazo —los cincuenta años de decadencia— sino satisfacer la enorme masa de demandas acumuladas y prestas a plantearse. La sociedad le creyó y el radicalismo, con más de la mitad de los votos, superó holgadamente al peronismo, que por primera vez en su historia perdía una elección nacional. Una alegría profunda y sustantiva, aunque un poco inconsciente, envolvió a sus seguidores y en alguna medida a toda la civilidad, que por un momento olvidó cuántos problemas quedaban pendientes y qué poco margen de maniobra tenía el nuevo gobierno.